

Cuba: Cómo contribuir a su democratización

Carlos Alberto Montaner

Escritor, periodista y político. Presidente de la Unión Liberal Cubana. Vicepresidente de la Internacional Liberal.

En 1989 cayó el Muro de Berlín, y tres años más tarde, ya sin rastros de lo que fuera llamada la «Europa del Este» -aquella triste frontera de satélites-la URSS llegó a su fin, liquidando tal vez para siempre la peligrosa etapa de la Guerra Fría. En aquel sorprendente período, uno tras otro fueron desapareciendo los gobiernos comunistas de Occidente, o, con grandes dificultades, fueron transformándose en otra cosa mucho más cercana a las sociedades basadas en la democracia como sistema político y en el mercado y la existencia de propiedad privada como sistema económico.

Menos Cuba, lo que no deja de ser paradójico, puesto que se trataba del más pobre y dependiente de los satélites de Moscú. En las tres décadas que duró el vínculo entre la URSS y Cuba, la isla caribeña recibió más de cien mil millones de dólares en subsidios soviéticos, mientras realizaba con ese país el ochenta por ciento de sus transacciones económicas internacionales. De manera que la predicción más razonable era la de quienes pensaban que, desaparecido el apoyo de la «metrópoli», la «colonia» se desmoronaría sin remedio. Al fin y al cabo, en un brevísimo período, la Isla, que ya era muy pobre en 1990, vería como en tres años su PIB caía en un cuarenta por ciento y la industria se paralizaba en un setenta, mientras la zafra azucarera pasaba de siete millones de toneladas a menos de cuatro. En 1990 Cuba pudo importar bienes o pagar servicios al exterior por más de siete mil millones de dólares. En 1993 la disponibilidad de dólares se había reducido a dos mil millones. Antes de la desaparición de la URSS, Cuba era un país pobre. Tras haber sucedido este cataclismo, la isla se convirtió súbitamente en un sitio miserable en el que, literalmente, una gran parte de la población pasaba hambre. El castrismo, aparentemente, había llegado a su final.

¿POR QUÉ NO CAE CASTRO?

No ocurrió así. ¿Por qué? Dos son las razones con las que se suele explicar esta extraña capacidad de

supervivencia del régimen. La primera, es la que dice que el castrismo es un fenómeno autónomo, que no debe su origen a la Segunda Guerra o a la imposición del Ejército Rojo, lo que pone a salvo al país de las catástrofes ocurridas en la lejana Rusia, entre otras razones, porque el gobierno todavía cuenta con basto apoyo popular; y la segunda, es la que busca en el acoso y la hostilidad de Estados Unidos la causa de una fortaleza interior basada en un fiero nacionalismo defensivo y no en la adhesión real al comunismo. Quienes esto creen, con frecuencia opinan que si Estados Unidos adoptara una actitud de «benigna indiferencia» hacia el pequeño vecino, y si comerciara con él normalmente, el castrismo acabaría por desmoronarse minado por la erosión consustancial a la penetración capitalista. Castro, por el contrario, supone que el fin del embargo y el establecimiento de buenas relaciones con Washington contribuirían a la consolidación de la «revolución» en el momento más crítico de la historia. De ahí que sus esfuerzos diplomáticos más visibles se encaminen a lograr esos objetivos, siempre y cuando esto no implique hacer concesiones que pongan en peligro su control total sobre el destino de los cubanos.

El primer argumento ignora el dato más elemental que explica cómo y por qué ciertas dictaduras consiguen prevalecer más allá de lo que se consideraría como su «tiempo histórico» legítimo: la capacidad represiva del régimen. Un gobierno que hace las leyes a su antojo, que maneja totalmente a los jueces, que tiene el control absoluto de una enorme policía política y de un ejército descomunadamente grande -una décima parte de la población, incluidas las milicias-; un gobierno que posee en exclusiva el privilegio de la información y de la comunicación, que administra la comida, y que a su conveniencia otorga o quita los puestos de trabajo; un gobierno totalitario, en suma, que está dispuesto a utilizar sin escrúpulos su inmenso poder, es un gobierno prácticamente imbatible, al margen de la legitimidad histórica que tenga, del apoyo popular que conserve o de la actitud complaciente u hostil de sus vecinos.

Incluso, tal vez más impresionante que la supervivencia del castrismo sea la del iraquí Saddam Hussein tras haber soportado el bombardeo de medio planeta, castigo seguido por un feroz embargo internacional. ¿Por qué subsiste el régimen de Saddam Hussein? Exactamente por lo mismo que sobrevive el de Fidel Castro: porque está dispuesto a utilizar la cantidad de represión y terror que sea necesaria para no perder el control del gobierno y de la sociedad. Asimismo, porque ni uno ni otro permiten la existencia de una oposición ideo organizada dentro del país, y ni siquiera toleran el surgimiento dentro del propio aparato de poder de sectores críticos que propongan opciones políticas distintas a las que dicta el gobierno central de acuerdo con la omnímoda voluntad del Máximo Líder, único centro real del poder en Cuba, como suele suceder en las dictaduras de corte caudillista. En Cuba -o en Corea, o en Irak- no hay «alas» reformistas que actúen en el seno del gobierno, los sindicatos, las organizaciones de masa, o en cualquiera de las instituciones oficiales. Tan pronto surge o se adivina una voz discordante, esa persona es acusada de «divisionista», «hipercrítica», o -si es muy notoria- se le califica de «traidora a la patria en momentos difíciles», lo que acarrea que sea apartada del poder, condenada al ostracismo o, a veces, encarcelada.

En Cuba -y es importante no autoengañarse infantilmente en este extremo- tampoco hay una lenta apertura hacia un modelo sustancialmente distinto al comunismo, porque Castro ha descubierto, por análisis o por instinto, que su mejor estrategia de supervivencia es el inmovilismo. Lo repite una y otra vez con meridiana claridad, y se lo hace repetir monótonamente a sus más fieles servidores en todos los foros internacionales y en todas las oportunidades: su gobierno no se propone ninguna transición hacia la democracia o hacia la economía de mercado. Su gobierno sólo admitirá aquellas medidas poco ortodoxas -*joint ventures* con capitalistas extranjeros, dolarización de la economía- que sean absolutamente necesarias para conseguir los recursos que su régimen necesita para sostenerse sin necesidad de hacer ningún cambio fundamental. ¿Cuántas veces tienen Castro y sus delfines que repetir esta declaración para que acaben de creerlos en el exterior?

Castro sabe, o intuye, que en el momento en el que afloje las riendas, o en el que deje abierta alguna ambigua esperanza de cambio, no podría evitar que esas expectativas, como sucedió en todo el mundo comunista occidental, dieran paso a un devastador debate sobre los límites de la ansiada transformación, debate que acabaría por destruir los cimientos de su poder personal. Es posible, pues, si vamos a tomar en serio lo que dice, que estemos ante el último marxista convencido de las bondades de esa desacreditada ideología, pero lo que no

admite es que estamos ante un leninista firmemente persuadido de la necesidad de utilizar el terror para mantenerse en el poder indefinidamente.

El segundo argumento -el que achaca a la política norteamericana la resistente fortaleza del castrismo- no deja de ser irónico. En mi ya larga vida de exiliado coincidí muchas veces con otros desterrados latinoamericanos que también sufrían el rigor de una vieja dictadura que duró nada menos que treinta y cinco años. Me refiero a los paraguayos y a la tiranía del general Alfredo Stroessner, felizmente liquidada hace pocos años por un golpe militar aparentemente originado en una disputa familiar. En todo caso, mis amigos paraguayos siempre intentaban explicar la permanencia de Stroessner en el poder con un argumento exactamente contrario al que hoy utilizan muchas personas para tratar de entender por qué el castrismo no ha sido arrastrado por el fin del comunismo en Occidente. Supuestamente -decían los demócratas paraguayos-, Stroessner no caía por la «benigna indiferencia» de Brasil, Argentina o Bolivia, países vecinos, y por la manifiesta falta de hostilidad de las grandes naciones democráticas del mundo, comenzando por Estados Unidos.



¿Cómo iba a terminar la dictadura de Stroessner -razonaban- si todas las naciones, encabezadas por Estados Unidos, comerciaban libremente con Paraguay y ninguna se atrevía a iniciar un boicot contra esa vieja tiranía? Si los paraguayos no sentían la menor presión internacional frente a la dictadura que los oprimía, ni escuchaban condenas solidarias frente al tirano, ¿cómo

esperar de ellos una actitud rebelde? Es decir, visto por la otra punta, era exactamente el mismo argumento que se emplea para condenar la política de Estados Unidos hacia Cuba, o para censurar a la Unión Europea por negarse a firmar un acuerdo especial de cooperación con la isla como consecuencia de la falta de libertades que padece mi país. Es como si fuera muy difícil aceptar que ciertas dictaduras que no ponen límites al ejercicio del terror se mantienen por el rigor represivo que son capaces de ejercer, y frente a las cuales la efectividad de las acciones lanzadas desde el exterior suele ser, lamentablemente, tan débil como la posibilidad que tiene la oposición interior de organizarse para derrocar la tiranía.

ESTADOS UNIDOS Y CUBA.

No obstante esa limitada capacidad de ejercer influencia desde el extranjero en los asuntos cubanos, Estados Unidos tiene y mantiene desde principios de la década de los sesenta una política frente a Castro acorde con lo que en la época de la Guerra Fría se llamó la «estrategia de la contención». Grosso modo, esa estrategia consiste en crearle dificultades económicas al régimen cubano, aislarlo en el terreno diplomático y desacreditarlo en la esfera política internacional. También, a partir de mediados de los ochenta, y dentro del espíritu de Radio Free Europe, a esa trilogía se ha sumado la de transmitir por medio de TV y Radio Martí -emisoras oficiales norteamericanas- programas dirigidos a contrarrestar la incesante propaganda con que el castrismo intenta moldear uniformemente la mentalidad de los cubanos.

Sin embargo, desde la muerte de John F. Kennedy -bajo cuyo mandato, y dentro del marco de la Guerra Fría, en abril de 1961 se lanzó la expedición de Bahía de Cochinos-, uno tras otro todos los presidentes pasados por la Casa Blanca, incluido el archicomunista Ronald Reagan -que envió a Alexander Haig y a Vernon Walter a explorar esos caminos-, han intentado normalizar las relaciones con el gobierno de La Habana, y todos, sin excepción, han fracasado por la misma razón: la absoluta inflexibilidad de Fidel Castro que jamás ha estado dispuesto a hacer la menor concesión, entre otras razones, porque dice estar convencido que preside un sistema moralmente superior al que preciniza Occidente. Estamos, pues, o ante un fanático dispuesto a defender sus ideas al precio que sea necesario, o ante un individuo voluntarioso, incapaz de dar su brazo a torcer, aunque en su inútil numantismo su país acabe destrozado. Pero, en cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: la parálisis, el inmovilismo, y la demagógica colocación de esta actitud irracional bajo la coartada de la defensa de la soberanía y el honor nacionales.

Nixon, hombre pragmático por encima de todo, hubiera pactado con Castro cualquier salida amistosa si éste hubiera situado a la isla fuera del perímetro militar soviético. Carter, como ha revelado Kissinger, estaba dispuesto a restablecer relaciones y poner fin a los conflictos entre los dos países a cambio de que Castro retirara sus ejércitos de África. Reagan hubiera hecho lo mismo si La Habana hubiera cesado su ayuda a los guerrilleros y terroristas que muy peligrosamente acosaban a El Salvador y a Guatemala en la década de los ochenta. El *quid pro quo*, el intercambio, la mutua concesión, es algo, sencillamente, que no le cabe en la cabeza a Fidel Castro. No entiende ese elemental principio presente en cualquier negociación.

Así las cosas, arribó a la Casa Blanca un presidente demócrata, Bill Clinton, quien por instinto y por convicciones está mucho más cerca del pacto que del conflicto, y quien, además, llevaría a las instituciones en las que se ejecuta la política exterior -el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad- a unos cuantos funcionarios a los que les hubiera gustado liquidar pacífica y honorablemente el viejo contencioso que Estados Unidos mantenía con Cuba. Ya no existía la URSS y la Guerra Fría parecía llegar a su fin: ¿qué sentido tenía mantener en alto las espadas frente a Cuba?

Pero para poder llegar a un arreglo, Cuba, naturalmente, tenía que moverse en la dirección del respeto a los Derechos Humanos e iniciar alguna forma, aunque fuera lenta, de apertura democrática. A inicios de los noventa, esa era una inexcusable precondition norteamericana, no sólo basada en principios abstractos, sino también en una muy concreta realidad de la política doméstica de Estados Unidos. En las más de tres décadas que había durado la dictadura, un millón de cubanos se habían instalado en Norteamérica y habían tenido un millón de hijos, y estos dos millones de personas habían alcanzado poder económico, representatividad política y capacidad para movilizar al Congreso, al Senado y a la opinión pública, con lo cual se garantizaban que cualquier político responsable tenía que tomar en cuenta sus deseos, intereses y percepciones. Era así como funcionaba la política norteamericana. Era así para los judíos-americanos con relación a Israel, los irlandeses-americanos en el tema de Irlanda, o los afroamericanos cuando se tocaba el tema del continente negro. También, a partir de la década de los ochenta, cuando los cubanos realmente arraigaron en la sociedad estadounidense, comenzó a ser así para los *Cuban-americans*.

Es en este contexto, auspiciada en la sombra por los *Cuban-americans*, en el que surge la controversial ley Helms-Burton dirigida a internacionalizar el embargo norteamericano contra el gobierno cubano. Ley que el presidente Clinton se resiste a apoyar hasta que el 24 de febrero de 1996 los Migs de Castro destruyen sobre aguas

internacionales dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate tripuladas por ciudadanos y residentes de Estados Unidos de origen cubano. Sobre su mesa de trabajo el presidente Clinton, que no podía quedarse cruzado de brazos ante esta acción criminal, tenía tres opciones: ordenar el bloqueo naval de la isla, bombardear las bases militares de los que salieron los aviones atacantes, o firmar, a regañadientes, la ley Helms-Burton. Las dos primeras casi con toda seguridad hubieran conducido a una guerra entre los dos países. Clinton eligió la tercera. No era su ley. No lo hacía feliz, pero le parecía la menos mala de las opciones a su alcance.

Curiosamente, La Habana hizo una lectura correcta de los hechos, pero sacó las conclusiones equivocadas. Tan pronto como la ley Helms-Burton fue firmada, Castro, además de llamar «idiota» al presidente Clinton, afirmó que era un escándalo que la política cubana de los Estados Unidos hubiera sido «secuestrada» por los exiliados anticastristas, a los que calificó, como es su costumbre, de terroristas desnaturalizados, enemigos de la nación que les vio nacer.

No era falso, por supuesto, que tras la ley Helms-Burton, como tras la creación de Radio y T.V. Martí, estaba el peso de una minoría que había aprendido a ejercer influencia en la porosa democracia norteamericana, pero la conclusión correcta no indicaba que Clinton fuese un «idiota», sino que para arreglar sus diferencias con Washington, el gobierno de Castro primero tenía que pasar por una aduana de la oposición interna y externa, concederle espacio político, e iniciar un proceso de *aggiornamento*, especialmente ahora, cuando el comunismo ya no es posible como sistema, y cuando no existe una URSS que financie el disparatado experimento comunista cubano.

Castro, que ya no tiene ejércitos en África, que ha visto dos veces derrotado en las urnas al sandinismo, que no pudo evitar que las guerrillas centroamericanas se incorporaran a la lucha política dentro de cauces democráticos, sólo tiene una mercancía que puede interesarle a Washington como intercambio para poner fin a casi cuarenta años de enfrentamientos: la democratización pacífica de la Isla, proceso que inevitablemente debe iniciarse negociando con quienes, según La Habana, tienen la capacidad de «secuestrar» la política cubana de Estados Unidos, o, incluso, de influir en la política de la Unión Europea y de América Latina por medio de estrechos vínculos ideológicos forjados en el seno de estas «familias» políticas conocidas como las **Internacionales**.

A fin de cuentas, si Estados Unidos defiende una América Latina sin dictaduras, y si se vio obligado a legitimar sus invasiones a Panamá y a Haití en la falta de democracia de aquellos narcogobiernos, carecía de sentido pedirle que ignorara los rasgos tiránicos del castrismo, pasando por alto su propia doctrina política

latinoamericana y la voluntad de esos dos millones de *Cuban-americans* que viven en el país y ahí votan y pagan sus impuestos. La lección, insisto, que Castro debió extraer de la ley Helms-Burton, no es que sus enemigos «secuestraron» la política norteamericana hacia Cuba, sino que ya no le es posible «negociar» con Washington saltándose a la oposición interna y externa. Sus enemigos, es cierto, no pueden expulsarlo del poder pero pueden entorpecer sus relaciones con Estados Unidos y con las democracias importantes del mundo, a menos de que en la Isla comience un proceso real y verificable de apertura democrática.

¿COMO CONTRIBUIR A LA DEMOCRATIZACION DE CUBA?.

Quizás la pregunta que ahora se impone ya puede formularse con toda claridad: ¿qué puede hacerse frente a un dictador que, en defensa de su poder personal, se niega rotundamente a seguir el camino que dictan, al unísono, el sentido común y la historia? Lo que han hecho los españoles es interesante y puede servir como experiencia y como modelo. Veámoslo con cierto detalle.

En el pasado, y durante varios años, la respuesta más contemporizadora y amable trató de formularla, mejor que nadie, Felipe González. Había que educar a Castro, pero aún cuando no fuera posible convencerlo de la inevitabilidad de un cambio político, se podía llegar al mismo objetivo transformando el modelo económico de la Isla. Para esos fines, González embarcó rumbo a Cuba al economista Carlos Solchaga, un socialdemócrata sin ningún ilusión estatista o colectivista, y allí el exministro español de Economía propuso un plan de apertura gradual de los mercados, control del gasto público, revalorización de la moneda, reaparición de las empresas privadas, y creación de un sector laboral al margen del Estado. La hipótesis era que una sociedad en la que existiera o se creara un segmento **civil** fuerte, la dictadura caería por su propio peso.

En realidad, se trataba de una deducción ajena a la tradición política latinoamericana, que había visto —entre otros ejemplos— cuarenta años de dictadura somocista (Nicaragua), veintisiete trujillista (República Dominicana), y treinta y cinco stroessnerista (Paraguay), conviviendo sin grandes dificultades con sociedades civiles más o menos robustas en las que funcionaba el mercado. Pero lo peor de la hipótesis de González-Solchaga (a los que nadie debe negarles una combinación de ingenuidad y buena fe) es que Castro ignoró totalmente los consejos de los españoles, pues entre sus planes no estaba desmontar su dictadura comunista, celosamente construida a lo largo de más de treinta años de denodados esfuerzos policíacos. Y como era

predecible, Solchaga, que es un profesional y un político serio, en el número tres de la revista **Encuentro**, publicado en Madrid en 1997, acabó por confirmar el fracaso de su estrategia, que era la de Felipe González, antes la inquebrantable lealtad de Castro al stalinismo.

Es por esto - que ya se sabía desde mucho tiempo antes-, y no por capricho o por sectarismo, por lo que José María Aznar, su Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y su Secretario de Estado para la Cooperación, Fernando Villalonga, cambiaron la política española hacia Cuba, acercándola más al diseño y a la voluntad europea -expresada en la «cláusula democrática» con que el Parlamento Europeo condiciona cualquier acuerdo entre los Estados y la UE-, pues carecería de sentido insistir en una fallida estrategia basada en créditos que no se devolvían, dádivas que no se agradecían, consejos privados que no se aceptaban, y apoyo diplomático público que no dejaba de ser una incómoda incongruencia, viniendo de una nación como la española, comprometida con la democracia. Y es por ello por lo que en diciembre de 1996 la diplomacia de Aznar, en un gesto absolutamente coherente, consiguió unificar a la UE detrás de un postura común en defensa del derecho a la libertad que deben tener los cubanos.

Es cierto que los adversarios políticos de Aznar -los socialistas y los comunistas dirigidos por Anguita- mediante una demagógica campaña de prensa le hicieron pagar un alto precio a los populares por haber cambiado la política cubana, ¿pero qué otra cosa podía haber hecho el nuevo gobernante ante el admitido fracaso de la antigua estrategia de González-Solchaga? Seguir otorgándole créditos preferenciales a Cuba, con la certeza de que no serán devueltos, en medio de una tensa situación económica nacional, hubiera sido una falta de respeto a los contribuyentes españoles. ¿Cómo justificar mayores sacrificios económicos de los españoles con el objeto de ayudar a un gobierno empeñado en mantener un sistema minuciosamente ineficiente que lleva casi cuarenta años de ininterrumpidos fracasos? ¿Cómo continuar alentando las inversiones de las empresas públicas en Cuba -Tabacalera, Argentaria- si en la Península hay un 23 por ciento de desempleo, mientras resulta evidente que el gobierno cubano, obcecadamente decidido a mantener un régimen centralista y enemigo del mercado, a medio y largo plazo pone en peligro esas inversiones? ¿Por qué garantizar con el dinero de todos los españoles las exportaciones de unas cuantas empresas que cobrarían de sus compatriotas lo que el castrismo seguramente no podría pagarles? Eso no es estimular el comercio o favorecer la democratización de Cuba, sino meter la mano en el bolsillo de unos españoles indefensos para beneficiar a otros que no quieren arriesgar su patrimonio en el mercado, sino prefieren jugar al capitalismo con las

cartas marcadas. Si ganan, ganan ellos. Si pierden, por haber acudido a un mercado riesgoso -uno de los más riesgosos del mundo según *The Economist*-, pierden los otros españoles, que son los que acaban abonando la factura.

En rigor, la política de Aznar/Matutes/Villalonga con relación a Cuba, que ha acabado por ser la política de la Unión Europea, es la única sensata, recomendable, y hasta posible frente al gobierno cubano. Si los consejos privados y los apoyos públicos han demostrado reiteradamente su inutilidad, lo honrado es llamarles a las cosas por su nombre y no vacilar en calificar de **dictadura bochornosa** a un régimen que lleva casi cuarenta años de atropellos. ¿No era eso lo que los sociales y comunistas hacían con el gobierno de Pinochet? La excusa de las «entrañables» relaciones entre Cuba y España no es más que eso: un burdo pretexto.

E igualmente razonable es subordinar cualquier trato favorable a la dictadura cubana en materia económica -como se desprende de la «cláusula democrática» de la Unión Europea- a que en Cuba se respeten los Derechos Humanos y se inicie seriamente el camino de la democratización. Incluso, lo recomendable es estimular a las relaciones iberoamericanas para que asuman frente a Castro una posición común semejante a la que quedó plasmada en el documento suscrito por la UE a instancias de España el pasado diciembre. No tiene demasiado sentido, por ejemplo, mantener al gobierno cubano como invitado a las Cumbres anuales iberoamericanas, íntegramente formadas por naciones democráticas, cuando sin el menor pudor Castro viola los compromisos firmados en esos eventos, como sucedió con el de Chile, en el que los signatarios se comprometían a respetar los Derechos Humanos y el pluralismo político.

Y, dentro de una estrategia de presiones a la tiranía y solidaridad con sus víctimas -la que se empleó contra Pinochet y contra la Sudáfrica de *apartheid*-, no debe pensarse que cuando se priva al gobierno cubano de recursos económicos quien sufre es el pueblo. Generalmente el pueblo cubano se beneficia de estas presiones. Lo que sucede cuando el gobierno cubano carece de medios para costear su monstruosa burocracia -además de tener que constreñir su aparato represivo y reducir sus fuerzas armadas- es que se ve obligado a hacer reformas y a permitir el surgimiento de actividades no totalmente controladas por el Estado. Si Castro, después de haber resistido toda clase de presiones internas -fue un sordo e inútil clamor durante el IV Congreso del Partido Comunista en octubre de 1991- se vio obligado en 1993 a transformar las granjas agrícolas estatales en cooperativas más o menos autónomas de campesinos, fue debido a la falta de recursos y no a su abundancia. Si luego, a regañadientes, y en contra de

sus convicciones, tuvo que autorizar los mercados libres campesinos, lo que instantáneamente mejoró la dieta de los cubanos, no fue como resultado de la prosperidad, sino de las carencias. Cuando el Estado cubano se perjudica, paradójicamente, la sociedad cubana conquista un palmo más de libertades en el terreno económico, y en algo consigue disminuir las penurias que la aquejan.

Por otra parte, nadie –incluido el propio Castro– cree o dice que las mínimas reformas introducidas en la economía cubana son el producto de un cambio en las percepciones políticas o en el descubrimiento tardío de Adam Smith. Todos –y Castro el primero– reiteran constantemente que es la crisis lo que impulsa el cambio, al tiempo que aseguran –más bien amenazan– que se retomará el camino del socialismo ortodoxo cuando pasen la fase de inestabilidad política y el caso económico que ha traído el fin de comunismo, época a la que se le llama período especial, como para recalcar que se volverá a un colectivismo sin fisuras cuando se retorne a los tiempos regulares. Y si esto es así, y si se ha comprobado cien veces que Castro detiene las reformas cuando logra aliviar la escasez, ¿quién puede honradamente concluir que el pueblo cubano resulta perjudicado por la falta de apoyo económico exterior a la dictadura? El pueblo, lo que ha aprendido empíricamente, es que sólo la crisis consigue doblarle el brazo a la tiranía.

Por otra parte, quienes dentro del régimen desean un profundo cambio de sistema, porque se dan cuenta de que Cuba no debe ser la absurda excepción comunista en un mundo basado en el mercado, la propiedad privada y la democracia, tampoco pueden ser ajenos a este razonamiento. La forma de respaldar a los reformistas no puede consistir en ayudar a los inmovilistas proporcionándoles recursos, sino en negarles cualquier forma de subsidio económico o de solidaridad política. Es el fracaso de los inmovilistas lo que fortalece la opción reformista.

Pero todavía hay otro elemento de carácter psicológico que es necesario tomar en cuenta. Toda dictadura –en realidad todo gobierno– para poder subsistir necesita de una zona de sustentación emocional construida con una autovaloración razonable positiva de quienes componen la dirigencia. Por supuesto, es posible formar parte de un gobierno desmoralizado por la terrible certeza de que sus líderes son universalmente percibidos como los causantes de la miseria o la indignidad de un pueblo humillado, pero en el momento en que cambien las circunstancias, esos dirigentes inmediatamente van a intentar huir de su propio estigma. Esto se vio clarísimamente en España, donde la demolición del franquismo no fue obra de una oposición demasiado débil y fragmentada que no podía convocar a la rebelión para tomar el poder por la fuerza,

sino de unos herederos de Franco que habían asumido la pésima imagen del régimen que, con muy mala conciencia, acababan de heredar. Existe, por supuesto, el **espíritu de cuerpo**, pero también, aunque nadie habla de él, existe el **antiespíritu de cuerpo**, esa fuerza irresistible que conduce a la disgregación de toda estructura claramente repudiada por la sociedad en la que sus dirigentes han perdido la autoridad moral, y en la que el discurso del poder carece de cualquier clase de relación con la verdad o la virtud.

La dictadura de Castro, qué duda cabe, está sentenciada a muerte por mil razones que ni siquiera vale la pena explicar, porque casi todas son obvias, pero la manera de coadyuvar a ese propósito consiste en enfrentarla a una especie de terapia de realidad, para que quienes acompañan al dictador en este tramo final de su agonía tengan que asumir la responsabilidad de sus hechos y se dispongan a actuar en la dirección correcta cuando llegue el momento oportuno.

“ Cuando el Estado cubano se perjudica, paradójicamente, la sociedad cubana conquista un palmo más de libertades en el terreno económico, y en algo consigue disminuir las penurias que la aquejan ”

Sabemos que hasta el propio hermano del dictador con frecuencia desconfía de la política impuesta por Castro. Sabemos que hay ministros y viceministros profundamente insatisfechos con la terquedad suicida de un Fidel que insensiblemente conduce a su país hacia el abismo. Sabemos que hay generales y coroneles que en la intimidad de sus hogares, o a los más queridos amigos, les comunican su inconformidad con cuanto sucede en el país. Nos consta que hay numerosos dirigentes cubanos –miembros del Comité Central, diplomáticos, embajadores, periodistas, diputados, artistas, escritores, altos funcionarios de diversos rangos– avergonzados por la continuada represión, por los bochornosos «actos de repudio»– verdaderos cuasilinchamientos de opositores indefensos–, indignados por los atropellos que sufre la ciudadanía; por la humillación que padecen los cubanos

que viven perpetuamente condenados a ese miserable *apartheid* de «segunda clase» que le corresponde a la infeliz casta de los que-no-tienen-dólares. Y a todos ellos, a esos dirigentes de cualquier categoría que sean, mientras se censura sin paliativos la dictadura, se les debe prometer la ayuda necesaria para enterrar pacífica y correctamente un período de la historia cubana que no debe seguir prolongándose.

No es posible que la dirigencia política cubana siga permanente sometida al chantaje psicológico de un fracasado dictador que en nombre de un confuso sentimiento de lealtad le exige su ciega sumisión a un proyecto político totalmente descartado por la historia.

Tras una revolución que se hizo contra la dictadura de Batista bajo la bandera de la democracia, Castro les pidió lealtad y obediencia a sus seguidores para colocar al país en la órbita soviética, convencido de que el destino del mundo sería el que se construía en Moscú bajo la advocación de Marx y de Lenin. Se equivocó, como sin la menor piedad demostraría la historia.

Luego les pidió lealtad y obediencia para hacer la revolución en el tercer mundo, en los Andes, en África, porque ese Tercer Mundo, como había sucedido con Cuba, acabaría alineado en el bando triunfador de los comunistas. Se volvió a equivocar, y ahí quedaron los cementerios cubanos en Angola y Etiopía, en la selva boliviana, en las alturas del Golam, en donde quiera que la violencia congregara a los hombres.

Y les pidió lealtad y obediencia para convertir a Cuba, bajo su férrea dirección, en un país próspero y desarrollado, porque la fórmula para lograrlo estaba en los manuales comunistas, en las redes comerciales del CAME, y en la solidaridad del mundo socialista. Y no

sólo se equivocó, sino que consiguió el extraño **antimilagro** de transformar a Cuba de uno de los países más ricos de América Latina, receptor de inmigrantes, a ser uno de los más pobres, exportador de ávida mano de obra incapaz de ganarse el pan en la patria que la vio nacer.

Jamás ha habido en la historia de América Latina un **visionario** al que la realidad le haya desmentido sus **visiones** con mayor contundencia. Todas, absolutamente todas las propuestas e hipótesis de Castro han fracasado, dejando por único rédito una estela de cadáveres, cientos de cárceles, miles de naufragos en el Estrecho de la Florida, y un país pavorosamente empobrecido, del que escapa todo el que puede hacerlo. Pero ahora el dictador, nuevamente, pide lealtad y obediencia para mantener un rumbo claramente equivocado en el que la nación cubana ha invertido casi cuarenta años y ha sacrificado a dos generaciones. ¿Hasta cuándo y por cuánto tiempo más esa dirigencia va a persistir en el vasallaje y el error? ¿Hasta cuándo y por cuánto tiempo más va a abdicar de su inteligencia propia, de su autonomía emocional, de su más íntimas convicciones?

En agosto de 1990, precisamente en Madrid, liberales, socialdemócratas y democristianos, coordinando sus esfuerzos con disidentes políticos radicados en la Isla, forjaron la **Plataforma Democrática Cubana** para buscar un cauce que permitiera, al menor costo posible, pasar de la dictadura comunista a una democracia moderna, «con todos y para el bien de todos», como alguna vez recetó José Martí. Siete años después, aquella oferta generosa se mantiene en pie. Mientras más tiempo se demore lo que es inevitable, más difícil, dolorosa y larga va a ser la reconstrucción del país. ☩